

Ignacio Muro Benayas

Director de la Fundación Espacio Público

La sumisión de la UE al acuerdo arancelario propuesto por Trump (aceptar un 15 % sin contrapartidas cuando en promedio era del 1,47 %) implica rendición e incapacidad para defender un «nosotros, los pueblos de Europa» como proyecto político autónomo. Algo que nos devalúa para cualquier otro acuerdo con terceros, basado en el respeto mutuo. Se suele culpar a la negociadora Ursula von der Leyen o a la división achacable a los países del este europeo. Pero hay más, mucho más. Antes, todos los gobiernos europeos, salvo el de España, se habían sometido al dictado de aumento del gasto militar al 5 % impuesto por Trump en la reunión de la OTAN. Y poco después, las principales economías de la UE (Alemania, Francia e Italia) acordaban «excluir» en una reunión del G7 y, por tanto, sin ninguna legitimidad para hacerlo, a las corporaciones de EEUU del pago de un mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades que formaba parte de una Directiva de la UE.

No son cambios súbitos. En realidad, esa sumisión se viene acentuando desde hace décadas, pero el momento actual las hace descaradamente evidentes ante el mundo.

Los cimientos tradicionales de la hegemonía de EE. UU.

El dólar y el poder tecnológico y militar han sido los pilares de la hegemonía estadounidense en las últimas décadas. Esas fortalezas han sido suficientes mientras su liderazgo ha sido indiscutible. La cuestión es vislumbrar si pueden seguir siéndolo cuando la creciente importancia económica y tecnológica de China la perfila como una amenaza potencial a medio plazo y abre un período marcado por la disputa de liderazgo mundial en muchos campos.

Por ello, conviene profundizar en la naturaleza de los desajustes económicos que provoca la coyuntura histórica en la que estamos.

En las últimas décadas, el liderazgo de EE. UU. ha estado acompañado de desequilibrios económicos estructurales, los denominados «déficits gemelos», expresados en las cuentas públicas y en el balance exterior por cuenta corriente¹, que eran compensados por su capacidad para financiarlos: de un lado, atrayendo capitales en inversiones productivas y, de otro, captando capitales flotantes desde sus mercados de capitales. Por último, emitiendo deuda pública, en dólares, que era adquirida por particulares e instituciones de otros países.

El saldo negativo de la balanza estadounidense por cuenta corriente es una tendencia iniciada con la llegada al poder de Ronald Reagan y se convierte en estructural en la medida que se consolida la globalización multilateral. De modo, que se puede achacar a las consecuencias de ser el país emisor del dólar o, también, a las políticas de deslocalización argumentadas como deseables durante los casi treinta años en los que la hegemonía de EE. UU. buscó especializarse en la producción de servicios tecnológicos de alto valor y abandonar la industria.

Lo cierto es que, inmediatamente antes, la balanza por cuenta corriente estaba relativamente equilibrada. Y que el desequilibrio está provocado, casi en su totalidad, por el déficit comercial de bienes, conectado con la desindustrialización manufacturera, no compensado por los crecientes superávits en la balanza de servicios tecnológicos, ni por los ingresos netos por intereses y dividendos o por *royalties* y otras transferencias.

1. Los últimos datos señalan la magnitud de los desequilibrios. En 2024 el déficit público en Estados Unidos alcanzó el 7,26 % del PIB mientras el promedio de los últimos 10 años fue del 5 %; su deuda pública asciende al 121 % respecto al PIB, quince puntos más que en 2018, y el déficit de la cuenta corriente es el 3,9 % del PIB, un 25 % más que el año anterior y por encima del 2,8 % de promedio de los últimos 10 años.

En cuanto a los constantes déficits presupuestarios, la ortodoxia económica suele afirmar que EE. UU. vive por encima de sus posibilidades. El nivel de consumo de sus empresas y familias ha estado dopado con constantes programas de financiación y estímulo de dos tipos: por un lado, a través de presupuestos expansivos, especialmente en gasto militar soporte de un complejo industrial que hoy concierne especialmente a las propias empresas tecnológicas. De otro, rebajando los impuestos para facilitar la demanda disponible. En esencia, su economía es una gran maquinaria de consumo e innovación que es financiada por el resto del mundo.

La subsiguiente expansión de los mercados de capitales globalizados y el estatus del dólar como moneda de reserva y refugio en periodos de crisis, propensa por ello a la revalorización respecto al euro y al yen, han facilitado con creces la financiación de esos déficits. Y ha alimentado la creación de un ecosistema empresarial innovador con capacidad para atraer el talento disponible en todo el mundo.

EE. UU. y el reto de un nuevo orden internacional

Desde hace un lustro, algo ha cambiado. La fragmentación de la globalización en bloques regionales fomentada por el COVID-19 y las rupturas de las cadenas de suministro obligan a EE. UU. a reconfigurar su influencia sobre el mundo.

Necesita poner límites a la «autonomía estratégica» de la UE, Japón, Reino Unido, Canadá o Corea. En eso parece existir consenso. Si la globalización se fragmenta en bloques regionales, la disponibilidad de flujos de capital globales excedentarios puede reducirse, dadas las mayores necesidades de inversión asumidas como imprescindibles en las, hasta ahora, regiones exportadoras de capital y aspirantes a una mayor autonomía.

Necesita, por un lado, su apoyo incondicional en conflictos bélicos que afecten a su hegemonía, y por otro, imponer límites y restricciones que garanticen su predominio, al menos, en los espacios de la energía, la defensa y la tecnología. Y si es posible en el comercio. Y ello afecta especialmente a Europa, como enseña veremos, a la que se quiere dependiente en las decisiones estratégicas, al menos las que afecten a esos ámbitos.

En la medida que China gana peso económico y tecnológico, lo normal sería que el dólar pierda, poco a poco, la cuota actual que le concede su estatus privilegiado de moneda de reserva. No tanto porque surja una alternativa como por el efecto de la diversificación deseada de los bancos centrales y los fondos e instituciones inversoras. De hecho, desde hace años, los países del grupo de los BRICS diversifican sus reservas. China y Japón, los principales tenedores de activos estadounidenses, han expresado su voluntad de disminuir deuda nominada en dólares. Estando atados en su condición de deudores y acreedores, no es un cambio que pueda producirse a corto plazo, pero basta con que anuncien sus intenciones para levantar las alertas de los mercados. Parece evidente que, en la medida que China se consolida a ojos del mundo como competidor estratégico de EE. UU., en algún momento aparecerán motivos para provocar un golpe de timón de uno u otro lado.

La inestabilidad del actual equilibrio muestra a EE. UU. la necesidad de «un nuevo orden» que le asegure la hegemonía. Un nuevo orden que debe permitir tomar medidas estructurales para disminuir el déficit por cuenta corriente o recurrir a la lógica financiera para asegurarse que las entradas de capital sigan compensando su dimensión. O las dos cosas al tiempo. En esencia, necesita un golpe de timón, una señal, una forma de poder, que refuerce los activos nominados en dólares (lo que supone que su moneda siga siendo la referencia de los mercados) y que, al tiempo, favorezca su especialización productiva o, al menos, limite los daños estructurales.

Y ese modo tiene todas las papeletas para adoptar formas imperiales más o menos crudas.

El uso de la OTAN como instrumento de disciplina de Occidente forma parte ya del consenso de las élites de EE. UU., pero, en su versión trumpista, adquiere formas imperiales directas y brutales de vasallaje, sin retórica alguna que las suavicen o escondan.

Mar-a-Lago: aranceles, industrialización y relaciones de servidumbre

En su discurso del 7 de abril de 2025, Stephen Miran², presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, defiende que su país proporciona dos llamados «bienes públicos globales»: protección militar a través de su red mundial de bases militares y el papel del dólar como moneda de reserva mundial. Este rol no es sostenible porque, dice, ha «diezmado» la industria manufacturera estadounidense y generado déficits comerciales «insostenibles». Y postula que es posible mantener la hegemonía del dólar y reformar el sistema al mismo tiempo, siempre que el resto del mundo asuma los costes que conlleva ese dominio.

En primer lugar, deben aceptar los aranceles de importación sin tomar contramedidas si quieren acceder al mayor mercado del mundo, (generando además ingresos diferenciales al Tesoro de los Estados Unidos). En segundo lugar, deben abrir sus mercados a las exportaciones estadounidenses. En tercer lugar, las empresas extranjeras deben trasladar parte de su producción a EE. UU., para ahorrarse aranceles y acceder a su mercado. Por último, deben aumentar su inversión en gastos de defensa, comprando armas y equipamiento a empresas estadounidenses.

El Acuerdo de Mar-a-Lago que redondea esa estrategia, requiere que el dólar no se aprecie, porque un dólar revalorizado compensaría parcialmente las políticas arancelarias que abandera Trump y generaría inflación interna y descontento social. Torsten Slok, economista jefe de Apollo, uno de los mayores fondos de inversión, lo resume así: «La idea es que Estados Unidos brinde seguridad al mundo y, a cambio, el resto del mundo ayude a presionar el dólar hacia abajo para que crezca el sector manufacturero estadounidense». Y eso supone, inducir (obligar, más bien) al resto del mundo a adquirir deuda norteamericana a largo plazo con rendimientos bajos, más bajos incluso que la inflación.

Lo que late en el fondo es, también, la defensa de una nueva lógica industrial que afecta a todos los sectores, no solo a los considerados estratégicos, y rompe las lógicas de especialización productiva de los últimos 30 años de globalización multilateral. El vicepresidente

J. D. Vance señala³ como un error la deslocalización del sistema productivo mientras se mantenían en el territorio las fases creativas y de diseño, que se entendían como adecuadas y suficientes para favorecer la innovación. Diseñar en California y fabricar en Shenzhen era la lógica de la división del trabajo. Esa lógica anglosajona se exportó al mundo y fue asumida como un mantra que favorecería la hegemonía de Occidente.

Sin citar a China, J. D. Vance afirma: «nos equivocamos. Resulta que las zonas geográficas que fabrican son muy buenas diseñando cosas. Hay efectos de red, de modo que a medida que mejoraban en el extremo inferior de la cadena de valor, también empezaron a alcanzarnos en el extremo superior. Nos apretaron por ambos extremos».

Es extraño que sea el populismo estadounidense el que argumente de ese modo, pero tiene razón. Se partía de la base de que el trabajo manual era intercambiable y no aportaba ningún valor singular al proceso productivo y que solo el trabajo intelectual de alto valor merecía ser retenido.

El resultado es que productividad, industria y mejores salarios son reconocidos ahora como deseables y convergentes. La cuestión es hasta qué punto pueden conseguir esa convergencia. La respuesta es ideológica e irreal: para ello, se debe bloquear la migración, entendida como «droga» que vicia con costes bajos la lógica empresarial, un argumento *ad hoc* que da valor económico a la xenofobia.

Pero las preguntas siguen en el aire: hasta qué punto es compatible el acuerdo de Mar-a-Lago con un dólar débil, hasta qué punto la política arancelaria acompañada de un dólar debilitado evitaría los efectos inflacionistas y favorecería la manufactura local y hasta qué punto todo eso es compatible con la hegemonía de EE. UU. Es cierto, que en los años 70 y en la primera década de este siglo un dólar débil no impidió el liderazgo geopolítico de EE. UU. Pero eran tiempos distintos, sin una potencia como China amenazando la hegemonía global.

En la actualidad, solo puede ser posible si la política se impone a las lógicas económicas. Si, en el exterior, se imponen lógicas imperiales y vasallajes extremos.

2. <https://www.hudson.org/events/chairman-council-economic-advisers-stephen-miran-trump-administrations-economic-agenda>.

3. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-vice-president-the-american-dynamism-summit>.

Y si, en el interior, el aparato coercitivo es capaz de imponerse con métodos autoritarios a las instituciones y pautas profesionales que comparten consensos del pasado y se introduce disciplina en el *establishment* hasta hacer inoperantes los contrapoderes democráticos. Esos son los rasgos imprescindibles del nuevo orden, necesariamente con modos neofascistas. Y en esa determinación Trump es claro.

Democracia y libertad se escinden. La democracia pasa a ser un sistema demasiado ineficaz. La libertad de elegir entre opciones diversas, a la carta, propias de la sociedad digital se imponen como consigna («viva la libertad, carajo»). Sin decirlo abiertamente, el modelo es China, con un estado autoritario al servicio de intereses corporativos con las industrias de tecnología y defensa como referentes y la «libertad» de elegir bienes y servicios como paradigma ciudadano.

La subordinación de Europa

Si estamos en una fase en que la política pugna por imponerse a las lógicas económicas, Europa muestra ahí su debilidad.

La reciente imposición del 5 %, como porcentaje del gasto en defensa sobre PIB, es una medida de largo recorrido. De un lado, prepara un escenario a medio o largo plazo dispuesto al choque frontal con China o Rusia, si fuera necesario. De otro, busca una velocidad de rearme que garantice las compras a la industria de defensa estadounidense a expensas de dificultar la convergencia entre los ejércitos europeos, así como la interoperatividad y autonomía de sus sistemas. Por último, impone desde arriba una jerarquía ideológica del gasto público que acarrea una oleada de ajustes sociales.

El europeísmo ve limitadas sus facultades para dibujar una visión autónoma del mundo, con matices propios respecto del atlantismo, que queda sellado como expresión genuina de la cultura occidental. Con ello, Europa pierde influencia en el Sur global y se incapacita para ser un actor que reequilibre el mundo. Lejos queda la Carta de París de 1990 y su apuesta por un Sistema Europeo de Seguridad, compartida desde Lisboa a Moscú, frustrada por la Cumbre de la OTAN en Roma al año siguiente.

Desde ese momento, quedó claro que EE. UU. nunca dejaría autonomía a Europa para desarrollar su seguridad continental. En esa línea han actuado, con formas diferentes, republicanos y demócratas.

Conviene repasar someramente lo realizado bajo el gobierno de Biden.

- En septiembre de 2021, antes de la invasión de Ucrania, Biden muestra que China es su prioridad al impulsar AUKUS, una alianza militar estratégica para la región Indo-Pacífico, junto a Australia y Reino Unido.
- La invasión de Ucrania, febrero de 2022, justifica que el atlantismo sitúe la seguridad por encima del resto de valores. La defensa de las «democracias occidentales» marca a Rusia como enemigo estratégico y a China como «desafío sistémico para la seguridad euroatlántica». La posterior cumbre de Madrid consagra la OTAN 360° y el derecho a intervenir en cualquier lugar del mundo.
- Las relaciones con Rusia y China son obstaculizadas sin ambages. Primero, mediante el sabotaje de Nord Stream, septiembre de 2022, que nutría de gas ruso a Alemania; después, obligando a la UE a comprar gas esquisto a EEUU; por último, rompiendo cualquier conexión de Italia con la estrategia china de la Nueva Ruta de la Seda.

Con Trump, los peajes neofeudales y la disciplina del Nuevo Orden dan un salto. Los aranceles y la fiscalidad marcan nuevos campos directamente económicos.

El Plan Draghi, ¿coherencia en el vacío?

El plan Draghi es intelectualmente coherente, pero su reclamo de más Europa puede, en la actual coyuntura, caer en el vacío. O, como mucho, convertirse en una ruta posibilista de mínimos. Su discurso en Coimbra es especialmente preciso en su dimensión política.

Crítica un marco regulador excesivamente fragmentado, con directivas cuya transposición a las legislaciones nacionales ha descafeinado el potencial convergente que hubieran deseado en Bruselas. Al hacerlo, parece ignorar que, en buena medida, esa fragmentación es consecuencia de los *lobbies* de las grandes empresas dominantes en cada país, interesadas en desarrollar estrategias defensivas amparadas en los

presupuestos de sus respectivos Estados y no en la integración que reclama Bruselas.

En todo caso sirve como posible hoja de ruta de lo que habría que hacer.

- Propone reorientar las políticas macro hacia la demanda interna y no hacia la competitividad exterior, lo que supondría acabar con las políticas de contención salarial y freno al consumo y podría ser incompatible con la disminución del gasto social que se deriva de las prioridades marcadas para los gastos de defensa.
- Para impulsar la inversión como segundo pilar de la demanda interna, propone planes europeos para infraestructuras de interconexión energética, para sistemas que garanticen la interoperatividad de los gastos en defensa y para las cuatro infraestructuras tecnológicas esenciales⁴. Esos planes deberían financiarse mediante la emisión de deuda común de la Unión. Demasiado ambicioso, pero factible si en paralelo se permite a los países más saneados (Alemania, Países Bajos y nórdicos) utilizar sus presupuestos nacionales y aumentar deuda.
- Plantea desvincular los precios del gas y los de las energías renovables para evitar subidas de precios, lo que supone enfrentarse al *lobby* energético, al acabar con el principio «marginalista», convertido en tabú. Pero, al tiempo, facilita la continuidad de la energía nuclear que justifica en la «neutralidad tecnológica» entre las «energías limpias», algo que, sin duda, favorece a Francia por su liderazgo en esa tecnología.
- Defiende disminuir la regulación en el ámbito de las tecnologías digitales, ahora centradas en el consumidor, que ha penalizado, dice, el ecosistema de la innovación disruptiva dando ventaja a las grandes tecnológicas estadounidenses. Su posición parece haber influido en la mayor permisividad de la Directiva sobre IA, en la que la Comisión Europea ha confirmado su intención de relajar esa regulación después de que un grupo de más de 40 consejeros delegados de algunas de las empresas europeas más importantes, encabezadas por el de la francesa Mistral, líder europeo de

IA, se hubieran quejado de sus «limitaciones y complejidad».

La coherencia posibilista del Plan Draghi confronta con las disyuntivas superpuestas que escinden a las élites europeas: posicionamiento ante Rusia, europeísmo frente a soberanismo, cosmopolitismo de las grandes ciudades frente a ruralismo y agricultura, tradicionalismo o liberalidad, derechos de minorías frente a absolutismo de mayorías...

Las amenazas populistas en la mayoría de los países de la UE hacen inviable una hoja de ruta mínimamente coherente y ambiciosa e impiden una cooperación reforzada que supere la regla de la unanimidad. Hoy, ninguno de los países centrales está en condiciones de ceder soberanía en aspectos claves del poder como son la energía, la banca y las telecomunicaciones.

Se acentúa así la sensación de incapacidad y desgobierno en la UE que Trump y sus ideólogos identifican con ineficacia de la democracia. Mientras tanto, elección tras elección la extrema derecha sigue escalando posiciones desde el estuario de Lisboa al río Vístula.

Europa: la defensa gana prioridad sobre la industria verde

El gasto en defensa, su consideración como piedra angular del neokeynesianismo europeo, desplazando a los fondos Next Generation, parece ser el elemento clave del futuro europeo.

Asumir un planteamiento cuantitativo sin entrar a valorar cuáles son los peligros para la Unión, en qué fronteras y de qué naturaleza o cómo soslayar las duplicidades e ineficacias actuales, supone aceptar el marco belicista que impone EE. UU.

La dimensión del plan Europeo de Defensa, por un importe de 800.000 millones de euros, superior al de Next Generation, manda un primer mensaje. Diseñado por la Comisión, casi un 20 % sería asumido y financiadas por la Unión, lo que describe el peso otorgado a la defensa común como bien público compartido. El 80 % restante sería financiado por los Estados de acuerdo a sus capacidades, pero eximiéndoles de ser incluidos en las reglas de gasto. De momento, la Comisión propone que un mínimo del 65 % se destine a la

4. Las cuatro prioridades son el almacenamiento de datos en la nube, la supercomputación, la ciberseguridad y las redes 5G y 6G de transmisión de datos.

propia industria de defensa de la UE, pero Trump ha avisado que las armas que envíe a Ucrania deben ser financiadas por Europa.

La recomposición de los intereses nacionales es ya la partida que se está jugando.

- Alemania se prepara para liderar el mercado europeo de armas en 2030 como elemento estratégico central de su nueva industria tecnológica. Su saneado presupuesto le permite financiar a corto plazo la compra de armas a EE. UU., mientras perfila sus estrategias a largo plazo. En paralelo, los programas de cooperación francoalemana destinados a fabricar los aviones y carros de combate de última generación, diseñados para un entorno geoestratégico diferente, sufren tensiones ante la premura de los cambios y la voluntad de liderazgo de ambos.
- **Francia, por su parte, es víctima de su propia doctrina militar**, centrada en la exportación de armamento y en guerras expedicionarias de tipo postcolonial, más que en un planteamiento moderno de defensa conjunta que exige integración a gran escala. A pesar de su potencia nuclear, su fragmentación y la ausencia de interoperatividad con otros sistemas es paradigma de las carencias europeas.
- Italia, uno de los principales fabricantes de armas del mundo, con grandes corporaciones industriales, como Leonardo y Fincantieri, asume también la defensa como hoja de ruta, con alianzas que incluyen al Reino Unido y Japón para aviones de combate y a Francia para portaaviones nucleares.
- Los países del Este de la UE también se incorporan con dinámicas propias a esta lógica militar. Polonia y Hungría muestran la complejidad de esa incorporación y las contradictorias vías y alianzas que promueven.

Un modelo que perpetúa desigualdades territoriales

El gobierno de España está asumiendo el reto de la defensa facilitando la convergencia entre sus pilares industriales (Indra, Navantia y Airbus), mientras parece mantener la prioridad en la transición ecológica. Pero, probablemente, no podrá evitar la lógica de la especialización productiva impuesta desde las nuevas lógicas de poder.

Si el impulso Next Generation permitía aspirar a corregir los desequilibrios territoriales europeos con el sur mediterráneo y, en particular, con el sur rural marginado, la prioridad por la defensa vuelve a colocar al norte y a las economías de las megaurbes en el centro del tablero económico.

El resultado podría ser la marginación definitiva de regiones olvidadas y desertizadas, que son las llamadas a alimentar con materias primas esenciales el sistema económico. Su situación de dependencia neocolonial podría acentuarse si se concentran en las periferias despobladas de Europa las industrias extractivas de tierras raras, como está previsto en el plan CRMA aprobado por la Comisión⁵. De los 47 proyectos estratégicos que tienen por objetivo garantizar la extracción, el procesamiento y el reciclado de tierras raras, es decir de las materias primas estratégicas, 20 son extractivos y 9 de ellos están localizados en la península ibérica, en las regiones de «la raya» que separa España y Portugal. Y otros 7, en otras zonas periféricas de Finlandia, Rumanía y Grecia.

Son las llamadas «zonas de sacrificio», áreas geográficas con alta concentración de industrias contaminantes de aire, agua y suelo, donde la actividad económica se prioriza sobre la biodiversidad, la salud y el medio ambiente de las comunidades locales. Y que en una Europa tensionada y a la defensiva tienen todas las de perder. Una muestra más de que la nueva lógica de poder afectará al último rincón. ■

5. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-80639>.